

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.

**VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, compareció don **PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N°16.658.896-0, en representación convencional de don **BORIS JAVIER BARRENECHEA LLANQUIMÁN**, chileno, soltero, administrador público, cédula de identidad N°15.958.060-1, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida las Condes N°11.380, oficina N°91, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, interponiendo demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido indirecto justificado y cobro de prestaciones labores, en procedimiento de aplicación general, en contra de la **JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS** (en adelante “JUNAEB”), Rol Único Tributario N°60.908.000-0, representado legalmente por don **ALEJANDRO LAYSECA ASTUDILLO**, chileno, desconoce profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°12.584.084-1, ambos domiciliados para estos efectos en Antonio Varas N°153, comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Señala que su representado prestó servicios para la demandada bajo subordinación y dependencia, en virtud de sucesivos contratos de honorarios, que en realidad eran contratos de trabajos, desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022, momento en que ejerció el despido indirecto. Su cargo correspondía al de “Control de gestión y desarrollo de proveedores en servicios médicos”, tratándose de uno de carácter permanente, estable e indispensable para la organización jerárquica de la demandada. Además, durante toda la relación se encontró sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior, expresa que los contratos a honorarios celebrados con la demandada infringen la legislación aplicable, ya que en virtud del principio de primacía de la realidad se trató de una efectiva relación laboral, dado que las labores del actor no se enmarcan dentro de lo establecido en el artículo 11 de Ley 18.834.



Indica que el 30 de junio de 2022, su representado decidió autodespedirse por la causal contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por el no pago de cotizaciones de seguridad de seguridad social, no escrituración del contrato de trabajo y no otorgamiento del feriado legal durante el período trabajado.

En relación con el cargo desempeñado por el actor, sostiene que debía supervisar el proceso de licitación del área metropolitana, de salud del estudiante, supervisar contratos e hitos, generación de procesos de pago, generación de indicadores de desempeños de unidad para ser presentado ante la dirección regional y nacional, elaborar reportes de presupuestos y análisis de presupuestos de programa. Además, que se trata de una labor intrínseca del servicio demandado, las que se encuadran con su misión, correspondiente a: *“Contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional mediante la implementación de políticas públicas y programas sociales; y la entrega oportuna de bienes y servicios a estudiantes en condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica”*.

Añade que, durante el período que se extendió la relación laboral, el actor recibió instrucciones por parte de su ex jefatura directa, don Alejandro Almonazir, jefe de unidad de Salud del Estudiante, y la Directora regional, Antonella Gilbert Bacciarini, quienes lo instruían diariamente de forma verbal, en las reuniones periódicas y/o por correos electrónicos.

Además, cumplía una jornada de trabajo de lunes a viernes con 44 horas semanales, con un horario de entrada y salida flexible, que mediaba entre las 7:30 a 9:30 horas y las 18:30 a 20:30 horas, y los viernes las salidas eran entre 17:30 a 19:30 horas.

Asimismo, prestaba servicios en las dependencias de la demandada, en el inmueble ubicado en Antonio Varas N°153, comuna de Providencia, contando con todos los insumos necesarios para desempeñar sus funciones, tales como oficina compartida, computador, escritorio, artículos de oficina, credencial e impresora.



Agrega que en los contratos celebrados la demandada le reconoció beneficios como feriado legal, permisos administrativos, horas compensadas, entre otros, y que su remuneración era pagada previa elaboración de un informe de gestión que se adjuntaba a la boleta de honorarios que se emitía mensualmente y que su remuneración ascendía a \$1.319.706 mensuales.

También, que existió continuidad de los servicios, lo que se opone a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 18.834, dado que no se condice con el aspecto temporal y específico de las contrataciones a honorarios.

Señala que la demanda adeuda a su representado las cotizaciones previsionales durante toda la relación laboral, por tanto, corresponde condenar a la demandada al pago de las mismas, siendo aplicable la nulidad del despido conforme a lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo.

Por tanto, solicita que se declare que entre su representado y la demandada existió una relación laboral desde el día 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022 conforme al artículo 7 del Código del Trabajo, que existió una continuidad de los servicios en dicho período, y que la demandada sea condenada al pago de las siguientes prestaciones: indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de \$1.319.706; indemnización por siete años de servicios por el monto de \$9.237.942; recargo legal del 50% ascendente a \$4.618.971; feriado legal equivalente a 154 días (6 años) por la suma de \$6.774.490; feriado proporcional por \$558.675 equivalente a 12,7 días (6 meses y 29 días); cotizaciones de seguridad social por todo el período que duró la relación laboral; y las prestaciones que deriven de la aplicación de la denominada “Ley Bustos”, contenida en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, según liquidación a practicar. Más reajustes, intereses y costas de la causa.

**SEGUNDO:** Que, compareció don **GERMÁN LABBÉ ESPINOSA**, en representación convencional de la demandada **JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS**, en adelante JUNAEB, con domicilio en calle Monjitas



N°565, piso 6, comuna de Santiago, oponiendo excepciones y contestando la demandada de autos en base a los argumentos que se exponen a continuación.

Deduco excepción de incompetencia absoluta, dado que no existe una relación laboral entre las partes, sino que un vínculo de carácter civil bajo la modalidad de honorarios de suma alzada, no pudiendo ser sometida a las reglas del Código del Trabajo, ya que en su calidad de órgano autónomo y con personalidad jurídica de Derecho Público, debe someter su actuar, particularmente a lo dispuesto en el artículo 11 de Ley N°18.834, que establece que las prestaciones a honorarios se rigen por lo indicado en el respectivo contrato, y en subsidio, las normas del Código Civil. Así, expresa que las funciones desarrolladas por el actor se enmarcan en lo establecido en el citado artículo, tratándose de cometidos específicos y que la continuidad de los servicios no se opone al contenido de la referida norma. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, el Tribunal es incompetente para conocer de la presente demanda.

En subsidio, contesta la demanda, reconociendo que el actor fue contratado mediante ocho convenios de honorarios para desempeñarse en control de gestión y desarrollo de proveedores en servicios médicos de la Dirección Regional Metropolitana, prestando servicios hasta el 30 de junio de 2022, día en que ejerce su despido indirecto. Añade que el actor fue contratado para prestar cometidos específicos conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 18.834.

Niega la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, reiterando que la relación se sujetó a lo dispuesto en la citada norma, al tratarse de cometidos específicos con independencia de la temporalidad de la prestación, dado que un honorario puede desarrollar funciones habituales y permanentes de la Administración del Estado, que no han podido encomendarse al personal de planta o contrata, con tal que se trate de cometidos específicos.

Agrega que el hecho que existiera una supervisión para verificar el cumplimiento de las labores no implica una subordinación y dependencia, dado



que aquello fue establecido en la cláusula primera del contrato celebrado entre las partes, obligaciones que resultan concordantes con la servicialidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia que rigen el actuar de la Administración del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 18.575. En consecuencia, expresa que el contenido de dichas obligaciones tiene por finalidad velar por la correcta aplicación de los principios que rigen a todo órgano público. Además, indica que el actor no fue objeto de evaluaciones de desempeño alguna, no verificándose la subordinación y dependencia, existiendo sólo una supervisión mínima conforme a los cometidos asentados en su propio convenio de honorarios.

Sostiene que la jornada laboral, registro de horario y beneficios estipulados en el convenio de honorarios no alteran la naturaleza de la relación entre las partes, debido a que la misma se determina por las tareas específicas encomendadas al actor. Además, que su representada se obligó a pagar por concepto de honorarios las sumas indicadas en cada uno de los contratos, lo que fue aceptado por el actor, la que no constituye remuneración.

Expresa que su representada no podía ni puede celebrar un contrato de trabajo con el demandante porque la ley no se lo permite, siendo incompatible la aplicación del Código del Trabajo con la legalidad presupuestaria.

Agrega que, la prestación de servicios a honorarios tiene un régimen tributario diverso a las relaciones regidas por el Código del Trabajo, por lo acoger la demanda se puede producir una alteración de este, generándose diferencias a favor y en contra del Fisco. En relación con el pago de cotizaciones previsionales, señala que el actor debió enterar hasta el año 2017 de forma voluntaria sus cotizaciones previsionales, y luego de forma obligatoria bajo la modalidad de cobertura total o parcial, conforme al régimen previsto para los prestadores de servicios a honorarios.

Por otro lado, sostiene que el actor celebró ocho convenios de honorarios con su representada sin manifestar disconformidad con dicha contratación, de lo cual se desprende su voluntad definida y persistente en el tiempo de mantener la misma vinculación, además, no reclamó ni cuestionó la misma sino hasta la



terminación de los servicios, no pudiendo desconocer lo que ha desarrollado y aceptado a lo largo del tiempo, por tanto el actor ha actuado en contravención a sus propios actos.

En cuanto a la nulidad del despido, expresa que resulta improcedente en casos como el de autos, dado que la existencia de la relación laboral nace sólo cuando la sentencia acoge la demanda, no pudiendo exigirse el pago de cotizaciones previsionales desde el inicio de la relación laboral. En subsidio, alega que conforme al artículo 17 del Decreto Ley N°3500, el pago de cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador sólo su retención y posterior pago en la institución previsional correspondiente, por tanto, no resulta procedente que su representado pague, a su costa, las imposiciones previsionales, por ello, si se ordena su pago, el valor de las mismas, deberá descontándose de los emolumentos que correspondiere pagar al trabajador. Señala que JUNAEB no ha efectuado ningún descuento o retención al actor con el objeto de efectuar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, recibiendo el pago íntegro de las prestaciones económicas, por tanto, en el evento que se declare la existencia de la relación laboral el pago de las cotizaciones del período respectivo no puede reclamarse a su representada. Por último, expresa que en el evento improbable que se determine que existió un contrato de trabajo, la remuneración acordada fue la determinada en el convenio de honorarios, correspondiendo efectuar cualquier descuento sobre dicho monto y no sobre el mismo.

Finalmente, sostiene que son improcedentes las prestaciones pecuniarias demandadas en virtud de la naturaleza de la relación entre las porque el Estatuto Administrativo no contempla indemnizaciones por término de labores respecto de un funcionario público, razón por la cual, menos aún pueden ser aplicadas a un trabajador a honorarios, a menos que se pacten en el mismo contrato. Respecto del feriado demandado, indica que no corresponde suma alguna por no tratarse de un vínculo de naturaleza laboral, y para el evento en que se determine la existencia de la relación laboral, expresa que de conformidad con lo establecido



en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, la acción se encuentra prescrita, respecto de aquellos feriados anteriores al 2020. Por último, sostiene que también resultan improcedente las demás prestaciones demandadas, y en subsidio que los reajustes deben calcularse desde la ejecutoriedad del fallo que declara la existencia de la relación laboral.

Por dichas consideraciones, solicita que se acoja la excepción de incompetencia absoluta, o en subsidio, el completo rechazo de la demanda, con costas.

**TERCERO:** Que, en audiencia preparatoria de fecha 10 de noviembre de 2022, la parte demandante evacuó el traslado respecto de la excepción de incompetencia absoluta, la que fue rechazada por el Tribunal por las razones expuestas que constan en el registro de audio.

**CUARTO:** Que, llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó.

Asimismo, se fijaron como hechos no controvertidos entre las partes: 1) Fecha de inicio de la relación, de 01 de julio de 2015 y el término se produjo el 30 de junio de 2022; y 2) Que el cargo que ejercía el demandante, era de control de gestión y desarrollo de proveedores en servicios médicos para la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Además, se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1) Si el actor prestó servicios bajo subordinación y dependencia de la demanda, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo en la fecha indicada en la demanda; 2) Estado de las cotizaciones previsionales del actor a la fecha del despido y eventual pago posterior; 3) Si la demandada incurrió en los hechos que se le imputan y si se dio cumplimiento a las formalidades del despido indirecto; 4) Remuneración que debe servir de base de cálculo de las prestaciones demandadas, en su caso; y 5) Si se adeuda el feriado reclamado o bien si se hizo uso del feriado reclamado.

**QUINTO:** Que, para acreditar sus pretensiones la **parte demandante** incorporó y rindió los siguientes medios de prueba:

- **Documental:**



- 1) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2015.
- 2) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2016.
- 3) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2017.
- 4) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2018.
- 5) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2019.
- 6) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2020.
- 7) Informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitido por el Servicio de Impuestos Internos del año 2021.
- 8) Certificado de Declaración de Renta vía Internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2016, Folio N°209506106.
- 9) Certificado de declaración de renta internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2017, Folio N°204317727.
- 10) Certificado de Declaración de Renta vía Internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2018, Folio N°210538978.
- 11) Certificado de Declaración de Renta vía Internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2019, Folio N°203250489.
- 12) Certificado de Declaración de Renta vía Internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2021, Folio N°339904201.





- 13) Certificado de Declaración de Renta vía Internet emitido por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año tributario 2022, Folio N°304560542.
- 14) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 56 a 61, del 07 de julio del año 2015 al 07 de diciembre del año 2015.
- 15) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 62 a 73, todas del año 2016.
- 16) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 74 a 85, todas del año 2017.
- 17) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 86 a 97, todas del año 2018.
- 18) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 98 a 109, todas del año 2019.
- 19) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 110 a 121, todas del año 2020.
- 20) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 122 a 133, todas del año 2021.
- 21) Boletas de honorario electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, números 134 a 139, todas del año 2022.
- 22) Resolución N°173/527/2017 con fecha 30 de marzo del 2017.



- 23) Contrato de prestación de servicios a honorarios entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con fecha 01 de julio de 2015.
- 24) Contrato de prestación de servicios a honorarios entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con fecha 01 de enero de 2016.
- 25) Contrato de prestación de servicios a honorarios entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con fecha 01 de julio de 2015.
- 26) Contrato de prestación de servicios a honorarios entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con fecha 04 de enero de 2021.
- 27) Hoja de vida de funcionario Boris Javier Barrenechea Llanquimán emitido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
- 28) Informe de evaluación de desempeño para personal de honorarios de Boris Javier Barrenechea Llanquimán con fecha 20 de octubre de 2017.
- 29) Resumen de feriados legales del año 2022 de Boris Javier Barrenechea Llanquimán emitido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
- 30) Registro de rendición de viáticos de Boris Javier Barrenechea Llanquimán emitido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con fecha 11 de enero de 2017.
- 31) Informe con datos de la Vida Funcionaria de Boris Javier Barrenechea Llanquimán emitido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con fecha 20 de junio de 2022.
- 32) Carta de comunicación de autodespido emitida por el actor, don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con destino a la Inspección del Trabajo de Providencia, y comprobante de envío de esta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 30 de junio de 2022.



- 33) Carta de comunicación de autodespido emitida por el actor, don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, con destino a la Junta Nacional de Auxilios y Becas, y comprobante de envío de esta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 30 de junio de 2022.
- 34) Correo electrónico de Boris Javier Barrenechea Llanquimán para María Rosa Espinoza Pérez con fecha 28 de enero de 2022 por inicio de jornada laboral.
- 35) Correo electrónico de Boris Javier Barrenechea Llanquimán para María Rosa Espinoza Pérez con fecha 28 de enero de 2022 informando actividades del día al finalizar la jornada laboral.
- 36) Correo electrónico de Boris Javier Barrenechea Llanquimán para María Rosa Espinoza Pérez con fecha 01 de marzo de 2022 por inicio de jornada laboral.
- 37) Correo electrónico de Boris Javier Barrenechea Llanquimán para María Rosa Espinoza Pérez con fecha 01 de marzo de 2022 informando actividades del día al finalizar la jornada laboral.
- 38) Foto de Boucher con horario y fecha de entrada y salida de la jornada laboral de Boris Javier Barrenechea Llanquimán.
- **Absolución de posiciones:** Asimismo, absolvió posiciones por la demandada don **Pablo Sebastián Baeza Valdivieso**, según consta en el registro de audio.
  - **Testimonial:** También, prestaron declaración doña **María Rosa Espinoza Pérez** y don **Gerardo Hernán Henríquez Castillo**, según consta en el registro de audio.
  - **Oficios:** Incorporó las respuestas de los oficios remitidos a AFP Capital, FONASA y AFC Chile.
  - **Exhibición de documentos:** Por último, solicitó que la demandada exhibiera los siguientes documentos: 1) Contratos y/o convenios suscritos entre Boris Javier Barrenechea Llanquimán y la Junta Nacional de Auxiliar



Escolar y Becas y, debidamente visados, correspondientes al periodo que va desde 07 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2022; 2) Decretos o resoluciones en donde se aprueba la contratación entre Boris Javier Barrenechea Llanquimán y la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas, correspondientes al periodo que va desde 07 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2022; 3) Informes de gestión mensual, trimestral, semestral y/o anual, emitidos por la actora y visados por la jefatura correspondiente de la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas, correspondientes al periodo que va desde 07 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2022; 4) Libro de control de asistencia o registro de asistencia en el cual consten las entradas y salidas de Boris Javier Barrenechea Llanquimán, correspondientes al periodo que va desde el 07 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2022.

Diligencia que se tuvo por cumplida respecto de los documentos N°1, 2 y parcialmente respecto del N°4, solicitando hacer efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo respecto de los documentos N°3 y 4 -en lo que respecto al control o registro de asistencia por los períodos 2015 a 2015, resolviendo el Tribunal dejar su resolución para definitiva.

**SEXTO:** Que, por su parte, la **parte demandada**, para acreditar sus alegaciones incorporó y rindió los siguientes medios de prueba:

- **Documental:**

- 1) Resolución Exenta N°3.209, de fecha 22 de julio de 2015, que aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, de fecha 01 de julio de 2015.
- 2) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 01 de enero de 2016 y su Resolución Exenta RA N°173/1609/2016 de 25 de mayo de 2017.



- 3) 3. Resolución Exenta RA N°173/527/2017 de 03 de enero de 2017, que aprueba el convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 03 de enero de 2017.
- 4) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 02 de enero de 2018 y su Resolución Exenta RA N°173/30/2020 de 01 de marzo de 2020.
- 5) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 01 de enero de 2019 y su Resolución Exenta RA N°173/156/2019 de 15 de mayo de 2019.
- 6) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 02 de enero de 2020 y su Resolución Exenta RA N°173/257/2020 de 23 de marzo de 2020.
- 7) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 04 de enero de 2021 y su Resolución Exenta RA N°173/108/2021 de 23 de febrero de 2021.
- 8) Convenio a honorarios a suma alzada de prestación de servicios a honorarios celebrado entre Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y don Boris Javier Barrenechea Llanquimán de 03 de enero de 2022 y su Resolución Exenta RA N°173/337/2022, de fecha 21 de marzo de 2022.
- 9) Impresiones de pantalla del sistema de personal de JUNAEB, en donde constan los feriados legales que fueron solicitados por don Boris Javier Barrenechea Llanquimán.
- 10) Correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2019 de doña Giovanna Adasme Valenzuela, funcionaria del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido a don Boris Javier Barrenechea Llanquimán,



informándole de la posibilidad de que sea traspasado a la contrata de este Servicio, y respuesta del demandante, de fecha 13 de septiembre de 2019.

11) Correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020 del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido a don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, informándole de la posibilidad de que sea traspasado a la contrata de este Servicio, y respuesta del demandante, de fecha 26 de agosto de 2020.

12) Correo electrónico de fecha 27 de julio de 2021 de don Sebastián Ignacio Riquelme Leiva, funcionario del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido a don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, informándole de la posibilidad de que sea traspasado a la contrata de este Servicio, y respuesta del demandante, de fecha 04 de agosto de 2021.

13) Correo electrónico de fecha 13 de junio de 2022 de don Sebastián Ignacio Riquelme Leiva, funcionario del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido a don Boris Javier Barrenechea Llanquimán, informándole de la posibilidad de que sea traspasado a la contrata de este Servicio, y respuesta del demandante, de fecha 17 de junio de 2022.

- **Absolución de posiciones:** Asimismo, absolvió posiciones el actor don **Boris Javier Barrenechea Llanquimán**, según consta en el registro de audio.
- **Testimonial:** Por último, declaró doña **María Victoria Bravo Vera**, según consta en el registro de audio.

**SÉPTIMO:** Que, apreciadas las pruebas incorporadas conforme a las reglas de la sana crítica, considerando especialmente su gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por los intervinientes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

1) Que el actor y la demandada celebraron diversos contratos de honorarios, cuyas vigencias abarcaron el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022, de forma sucesiva y continuada en el tiempo,



desempeñándose el demandante como profesional de Control de Gestión y Desarrollo de Proveedores de Servicios Médicos.

En dichos convenios se indica que su labor será supervisada por el Director Regional o Jefe del Departamento, que tiene una jornada laboral de 44 horas semanales y que debe registrar su asistencia para verificar el cumplimiento de las horas acordadas, efectuándose descuentos por atrasos o ausencias injustificadas.

Asimismo, se le otorgan al actor una serie de beneficios correspondientes a licencias médicas, vacaciones anuales, progresivas, acumulación de las mismas de un año a otro, permisos administrativos con goce y sin goce de honorarios, permisos especiales tales como por muerte de hijo, permiso parental del inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo, por matrimonio, para alimentar al hijo menor de 2 años, por exámenes de mamografía y próstata una vez al año -previo cumplimiento de edad-, posnatal parental del artículo 197 bis del Código del Trabajo y beneficio de sala cuna.

Hechos que se tienen por establecidos en virtud de los contratos de honorarios suscritos por ambas partes y los respectivos decretos que los aprueban, incorporados por ambas partes y exhibidos por la demandada, como asimismo por el documento que contiene la “Información de Contratos” del actor.

2) Que durante toda la relación contractual el actor emitió boletas de honorarios mensuales para la demandada, conforme a los montos indicados en los respectivos contratos, por los siguientes montos brutos: (i) desde julio de 2015 a diciembre de 2016 por \$1.076.250; (ii) desde enero a diciembre de 2017 por \$1.110.690; (iii) desde enero a diciembre de 2018 por \$1.138.457; (iv) desde enero a diciembre de 2019 por \$1.178.303; (v) desde enero de 2020 a diciembre de 2021 por \$1.121.295; y (vi) desde enero a junio de 2022 por \$1.319.706; hechos que se tienen por acreditados en virtud del Informe Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas del actor correspondientes a los años 2015 a 2021 y las respectivas boletas de honorarios, debidamente incorporados por la parte demandante.



3) Que el actor debía registrar su hora de ingreso y salida diariamente; hecho que se tiene por establecido en virtud de los informes de asistencia mensual que exhibió la demandada, correspondientes a los años 2018 a junio de 2022 y boucher de registro de asistencia del día 29 de septiembre de 2020 incorporado por la demandante.

4) Que la demandada ofreció al actor cambiar su calidad de honorarios por de contrata en septiembre de 2019, en agosto de 2020, en julio de 2021 y el 13 de junio de 2022, lo que no fue aceptado por el demandante.

5) Que el actor hizo uso de feriados durante toda la relación contractual, en el año 2016 por 12 días, en el año 2017 por 26 días; en el año 2018 por 21 días; en el año 2019 por 18 días; en el año 2020 por 13 días; en el año 2021 por 21 días; y en el año 2022 por 12 días, tratándose de días corridos; hecho que se tiene por establecido conforme a las impresiones de pantallas que contienen el los feriados solicitados por el actor, incorporados por la demandada, y resumen de feriados legales del actor correspondiente al año 2022 incorporado por la demandante.

6) Que el 30 de junio de 2022, el actor se autodespidió por la causal contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, comunicación que fue remitida vía correo certificado a la Inspección del trabajo y al domicilio de la demandada indicado en el último convenio de honorario el mismo 30 de junio de 2022; hecho que se tiene por establecido en virtud de la carta de despido indirecto del actor y comunicación de autodespido dirigida a la Inspección Comunal del Trabajo de providencia de fechas 30 de junio de 2022, y formularios de admisión de Correos de Chile de fecha 30 de junio, que dan cuenta del envío de las respectivas comunicaciones incorporadas por la parte demandante. Respecto de estos últimos documentos, cabe señalar que fueron ofrecidos en la audiencia preparatoria e incorporados en la audiencia de juicio, habiéndose acompañado con la demanda.





7) El actor no registra cotizaciones previsionales en AFP Capital y en AFC durante el período de la relación contractual, y que el demandante efectuó el pago de sus cotizaciones previsionales en FONASA desde julio del año 2017 a junio de 2022; hechos que se tienen por establecidos de acuerdo a la información enviada por las referidas instituciones contestando los oficios.

**OCTAVO:** Que, establecidos los hechos de la causa, corresponde pronunciarse sobre el fondo de la acción deducida, determinando si en la especie existió una relación laboral regida y amparada por las normas del Código del Trabajo, posición sustentada por la parte demandante, o bien, se trató de una relación civil de prestación de servicios a honorarios, regido por las normas del Derecho Civil, y reconocida por el Derecho Administrativo, sustentada por la parte demandada.

En cuanto a la posibilidad de contratar honorarios, el artículo 11 del DFL 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, Sobre Estatuto Administrativo (en adelante “Ley N°18.834”) , estable lo siguiente: *“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.*

*Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”*

Según el tenor de la norma transcrita, queda claro que las contrataciones a honorarios en el ámbito de la Administración, pueden tener lugar en dos hipótesis: a) cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución; y b) cuando la contratación tenga por objeto cometidos específicos. La expresión “accidental”, si bien no ha sido definida por el legislador, su uso



general o frecuente denota la idea de una labor transitoria y excepcional, en contraposición con las “labores habituales” que, expresamente, se excluyen de la contratación a honorarios; mientras que el “cometido específico”, previsto en el inciso segundo de la norma, importa una labor precisa, concreta y determinada.

Tal como consta en el motivo anterior, el actor prestó servicios por cerca de 7 años para la JUNAEB, desarrollando el cargo de Control de Gestión y Desarrollo de Proveedores de Servicios Médicos, llamando la atención a esta sentenciadora que la las funciones encomendada al actor, según se desprende de los respectivos convenios de honorarios y de las resoluciones exentas que las aprueban, consistía en velar por la ejecución de los convenios y contratos suscritos entre la demandada y las entidades públicas y privadas en virtud de las acciones de control de los programas implementados por la institución, análisis de coberturas y presupuesto de la unidad de salud del estudiante, control de gestión de servicios médicos y licitaciones, revisión de bases administrativas de estas, y revisión de documentación ingresada para la tramitación de pagos de la Unidad de Operaciones acorde a lo establecido en las bases y contratos correspondientes, entre otras.

Cabe agregar que los tres testigos, estuvieron contentes en señalar que las funciones del actor eran de índole administrativa, necesaria para la correcta ejecución de contratos, licitaciones y pago de proveedores de la demandada. En efecto, doña María Rosa Espinoza, señaló que conoce al demandante porque trabaja en JUNAEB desde el 2017 y desde el 2020 trabajó con él, ya que se encontraba de la sección de administración general, la que luego varió su nombre a unidad de salud, señalando que al actor correspondía realizar el control y gestión de contratos, participar en licitaciones y presupuestos de servicios médicos, elaboración de RCC, seguimiento acepta, ingreso de facturas, solicitar facturas a proveedores, revisar bases de licitación, requisitos de pagos y exigir pagos estipulados en los contratos. Por su parte, don Gerardo Henríquez, quien trabajó junto al actor por 6 años, señaló que revisaba bases de licitación, planilla programática de servicios médicos, control de órdenes de compra, control de



facturas, revisión de rendiciones, emisión de RCC, revisión de PAES y gestión de contratos de garantías. Por último, doña María Victoria Bravo, expresó que conoce al demandante desde el año 2016 en la misma área y veían temas administrativos de servicios médicos, todo lo administrativo, licitaciones, contratos y rendiciones.

Como se desprende de la prueba rendida, las labores realizadas por el actor no pueden ser consideradas como labores esporádicas y específicas, ya que se trata de funciones necesarias para el adecuado y correcto funcionamiento de JUNAEB, al tratarse de labores administrativas relacionadas con contratos, licitaciones, proveedores y pagos, las que resultan fundamentales e indispensables para que dicha institución pueda realizar sus diversos cometidos y cumplir con sus objetivos.

Lo anterior, resulta concordante con el hecho que la propia demandada ofreciera en cuatro oportunidades al actor pasar a ser contrata, lo que reafirma que se trataban de labores necesarias y permanentes del órgano, dado que debían ser ejecutadas por un funcionario público.

**NOVENO:** Que, resuelto lo anterior, considerando que las funciones que prestaba el actor se trataban de funciones habituales y propias del funcionamiento del organismo demandado, corresponde determinar si las mismas fueron realizadas bajo subordinación y dependencia en los términos establecidos por el artículo 7 del Código del Trabajo.

Al respecto, cabe señalar que constituye un hecho acreditado en autos que el actor debía cumplir una jornada laboral y se encontraba sujeto a un control horario, además tenía derecho a una serie de beneficios de índole laboral que resultan -al menos- curioso que se encuentren presente en una relación a honorarios, tales como feriado legal, progresivo, sala cuna, permisos por nacimiento y muerte de un hijo, posnatal, entre otros. Circunstancias que también fueron constatas por los testigos doña María Rosa Espinoza y don Gerardo Henríquez, quienes dieron cuenta que los mismos efectivamente eran aplicados en la práctica. Lo mismo se desprende de las hojas de vida del actor incorporados por la demandante, en donde se registran los permisos, feriados utilizados y sus



atrasos, y de las capturas de pantallas incorporados por la demandada, donde consta los feriados utilizados por el actor durante toda la relación.

Además, la primera testigo declaró ser la jefatura del actor, lo que fue confirmado por el segundo. Cabe agregar, que el actor debía dar cuenta de las gestiones realizadas no sólo con el informe mensual indicado en el contrato de honorarios, sino que además de las actividades diarias, como se muestra en los cuatro correos electrónicos intercambiados por el actor y doña María Rosa Espinoza incorporados por la parte demandante.

A mayor abundamiento, el actor era objeto de evaluaciones periódicas por parte de su jefatura, como se desprende del informe de evaluación de desempeño incorporado por la demandante correspondiente al año 2017.

Por otro lado, de las boletas de honorarios emitidas por el actor durante la relación contractual con la demandada, en su mayoría son correlativas y emitidas mes a mes, circunstancia que relacionada con el informe anual de boletas de honorarios emitidas por el demandante, es posible desprender que la prestación de servicios del actor resultaba ser la única, o al menos, la principal fuente de ingresos del actor, existiendo exclusividad.

Por dichas consideraciones, es posible concluir que el actor fue contratado para cubrir una relación subordinada, dependiente y propia del servicio, fuera de los términos contemplados en el artículo 11 de la Ley N°18.834, reuniéndose todos los requisitos contemplados en el artículo 7 del Código del Trabajo.

Por dichas circunstancias, se tendrá por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de julio de 2015.

**DÉCIMO:** Que, establecida la relación laboral entre las partes, corresponde revisar su término.

Tal como quedó establecido en el motivo séptimo, particularmente en el punto N°4, el actor hizo uso del despido indirecto el 30 de junio de 2022, remitiendo ese mismo día mediante carta certificada la comunicación al domicilio del demandado registrado en el último contrato de honorarios y a la Inspección del trabajo, por tanto, dio cumplimiento a las formalidades legales del autodespido



exigidas en el artículo 162, en relación con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 171 del Código del Trabajo.

En consecuencia, corresponde revisar los hechos contenidos en la referida carta, la que, en lo pertinente, indica lo siguiente: *“En relación a lo anterior hago presente que en particular acudo a la siguiente causal establecida en el artículo 171 del Código del Trabajo; causal N°7 del artículo 160 esto es “INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO.*

*Cabe hacer presente que desempeñé mis labores hasta el 30 de junio de 2022, poniendo término a mi vínculo laboral, el cual se mantenía vigente desde el día 1 de julio de 2015.*

*Los constantes incumplimientos en que ha incurrido la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, son:*

*1. EL NO PAGO DE COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: AFP, salud y AFC, prestaciones que en cuanto a su retención y no pago son exclusivamente cargo del empleador en conformidad con el Artículo 3 inciso 2 de la Ley N°17.332, Artículo 19 del Decreto Ley 3500 y Artículo 58 del Código del Trabajo.*

*2. LA NO ESCRITURACIÓN DE MI CONTRATO DE TRABAJO: pese a las numerosas solicitudes verbales para la escrituración de este, vulnerándose por tanto la normativa contenida en el artículo 9 del Código del Trabajo.*

*3. NO OTORGAMIENTO DE FERIADO LEGAL DURANTE EL PERÍODO TRABAJADO, en conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo.*

*Dichos incumplimientos los he hecho saber desde varios meses, sin recibir solución, generando una situación de menoscabo a mi persona, lo que me obliga a desvincularme (...).”*

En relación al incumplimiento de la no escrituración del contrato de trabajo, la relación entre las partes se rigió por sucesivos contratos de honorarios los que fueron escriturados desde 1 julio de 2015 al 30 de junio de 2022, los que si bien, no reflejaban la naturaleza real del vínculo ni las condiciones efectivas de la



contratación, no puede considerarse como un incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, ya que únicamente en la presente sentencia se ha declarado la existencia de una relación laboral entre las partes, más aún, considerando que la demandada se veía impedida en base a la normativa vigente, de contratar al actor en la categoría de “planta” o “contrata”, pues se trata de cargos permanentes asignados previamente por ley a cada institución, ni bajo el Código del Trabajo por inexistencia de norma que lo habilite para ello.

También corresponde desestimar el incumplimiento alegado respecto del no otorgamiento del feriado legal durante el período trabajado, dado que como quedó acreditado en el motivo séptimo el actor hizo uso del feriado correspondiente durante toda la relación laboral con la demandada.

Por último, en cuanto al no pago de cotizaciones previsionales, como quedó establecido, la demandada no efectuó el pago de cotizaciones en AFC ni AFP y las correspondientes en FONASA fueron pagadas por el demandante desde julio del año 2017 a junio de 2022. Así, se ha acreditado que la demandada ha incurrido en el referido incumplimiento imputado en la carta de despido indirecto del actor.

En relación al no pago de cotizaciones previsionales, lo cierto es que nuestra legislación ha previsto una serie de medidas y resguardos para evitar la ocurrencia de esta situación, tales como la nulidad del despido, o incluso la posibilidad de accionar mediante la búsqueda de responsabilidades penales, dado que nuestro ordenamiento jurídico ha tenido considerado como de especial relevancia el intentar evitar que las cotizaciones de los trabajadores no sean pagadas oportunamente, por cuanto ello les impide gozar plenamente del derecho constitucional a la seguridad social que beneficia a los trabajadores, constituyendo un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Cabe agregar que el razonamiento efectuado anteriormente no varía por el hecho de que al actor se le haya ofrecido en diversas oportunidades pasar de honorarios a contrata, dado que se trató de una situación jurídica que nunca llegó a concretarse, manteniéndose el actor en calidad de honorarios, circunstancia que



por lo demás permite reconocer el vínculo de subordinación y dependencia, en base al principio de primacía de la realidad. No pudiendo obviarse el hecho que se de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Código del Trabajo los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables.

Asimismo, el hecho que el actor haya ingresado a prestar servicios otra institución pública, el 1 de julio de 2022, día inmediatamente posterior a su despido indirecto, según reconoció expresamente al absolver posiciones, no cambia el análisis efectuado porque y la ley no exige para efectos de calificar el autodespido conforme a derecho, que el trabajador se encuentre cesante o que no haya ingresado a prestar servicios, debiendo circunscribirse la controversia únicamente a los hechos contenidas en la respectiva carta.

Por dichas consideraciones, habiéndose acreditado un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, se declarará justificado y conforme a derecho el despido indirecto ejercido por el trabajador el 30 de junio de 2022, y en consecuencia, la demandada será condenada a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por siete años de servicios de conformidad a lo establecido en el artículo 171, en relación con el inciso cuarto del artículo 162 e inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, incrementada esta última en un 50%, según lo dispone el inciso primero del artículo 171 del Código del Trabajo.

**UNDÉCIMO:** Que, en cuanto al feriado legal demandado, la demandada opuso excepción de prescripción de conformidad con lo establecido en artículo 510 del Código del Trabajo, considerando que los derechos laborales prescriben en el plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles, dado que el actor solicita la compensación del feriado legal 154 días, equivalente a 6 años, es decir, por toda la relación laboral habida entre las partes, y 12,7 días de feriado proporcional, equivalente a 6 meses y 29 días.

Así, habiéndose constatado la existencia de la relación laboral y habiéndose notificado válidamente la demanda el 12 de septiembre de 2022, y de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, se



declararán prescritos los feriados devengados con anterioridad al 12 de septiembre de 2020, por tanto, se acogerá dicha excepción.

En cuanto a los feriados no prescritos, desde el 13 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2022 se devengaron favor del trabajador 37,67 días de feriado legal y proporcional, y que hizo uso de 33 días en el referido período según consta en los comprobantes de vacaciones incorporados por la demandada, y considerando que la última remuneración ascendía a \$1.319.706, la demandada será condenada al pago de \$205.433 correspondiente a 4,67 días por concepto de feriado legal y proporcional.

**DUODÉCIMO:** Que, en cuanto al cobro de cotizaciones previsionales consta que el actor se pagó las cotizaciones previsionales en FONASA desde julio de 2017 a junio de 2022, razón por la cual no se condenará a la demandada a efectuar el pago de dichas cotizaciones, ya que se trata de cotizaciones que fueron debidamente solucionadas por el actor, quién conforme a la normativa imperante en base a la relación “a honorarios” que vinculada a las partes, efectuó el referido pagó, tratándose de una obligación que se encuentra cumplida, no existiendo ningún daño previsional que reparar. Además, se trata de aportes asistenciales que solamente beneficiarían a la referida institución dado que el trabajador no podrá recibir prestaciones con cargo a estos aportes, dado que no son otorgados de forma retroactiva, la que implicaría que el referido órgano se enriquecería injustamente.

No obstante lo anterior, la demandada será condenada al pago de cotizaciones previsionales en AFP Capital y AFC durante el período de vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2022, según la remuneración efectivamente percibida por el actor, correspondiente a: (i) desde julio de 2015 a diciembre de 2016 por \$1.076.250; (ii) desde enero a diciembre de 2017 por \$1.110.690; (iii) desde enero a diciembre de 2018 por \$1.138.457; (iv) desde enero a diciembre de 2019 por \$1.178.303; (v) desde enero de 2020 a diciembre de 2021 por \$1.121.295; y (vi) desde enero a junio de 2022 por \$1.319.706.





**DÉCIMO TERCERO:** Que, en cuanto a la nulidad del despido establecida en el artículo 162 inciso 5 del Código del Trabajo, no se hará lugar a la misma, porque dicha sanción se establece para el empleador que ha retenido de las remuneraciones del trabajador las cotizaciones de seguridad social y luego nos las entera en el organismo correspondiente, lo que no aconteció, por cuanto la demandada no efectuó retención de dineros de las remuneraciones pagadas al actor mensualmente, atendido que en su concepto la vinculación contractual que lo unía al actor era de naturaleza diversa a la laboral, sin perjuicio de lo que se determinó en el presente juicio. Asimismo, tratándose de una norma sancionatoria su aplicación es de derecho estricto no admitiendo otra interpretación.

Además, dado que sólo la presente sentencia declara la existencia de la relación laboral, no puede la demandada convalidar el despido a su mero arbitrio con el pago de cotizaciones previsionales, dado que se veía impedida por la relación existente entre las partes, quien en base a la normativa vigente, no podía contratar en la categoría de “contrata” ni “planta”, pues se trata de cargos permanentes asignados previamente por ley a cada institución, ni bajo el Código del Trabajo por inexistencia de norma que lo habilite para ello, tratándose de contratos que gozaban de presunción de legalidad bajo el estatuto bajo al cual se encontraban amparados, sin perjuicio de ordenar el pago de la cotizaciones en AFP y AFC en los términos ya mencionados en el motivo anterior.

En sentido similar se ha pronunciado la Corte Suprema, en Sentencia de unificación de jurisprudencia Rol 152.132-2022 de fecha 21 de marzo de 2023, al expresar que: *“Quinto: Que las sentencias reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N°40.253-2017, reafirmando tal criterio sin variación más recientemente en la Rol N°25.563-21, sosteniéndose que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto*



*que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada”.*

**DÉCIMO CUARTO:** Que, por haberse reconocido la relación laboral, los reajustes e intereses de las sumas ordenadas pagar en esta sentencia sólo se devengarán a contar de la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, no se harán efectivos los apercibimientos contemplados en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, respecto de los documentos solicitados exhibir a la demandada, correspondientes a los N°3 y 4, esto es informes del actor y el libro de asistencia respecto de los años 2015 a 2018, dado que los hechos de la causa han sido establecidos conforme a la prueba rendida por las partes en el proceso.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, y el resto de la prueba rendida en nada altera lo ya razonado. En efecto, los certificados de rentas del actor correspondientes a los años 2016 a 2022, dado que ninguna información útil aportan a la controversia de autos, y la absolución de posiciones de don Pablo Sebastián Baeza Valdivieso en representación de la demandada, dado que señaló no conocer al demandante ni estar familiarizado con sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 159, 160, 162, 163, 171, 172, 420 y siguientes, 456 y 459 y siguientes del Código del Trabajo, y artículo 11 de la Ley N°18.834, se resuelve:

- I. Que **SE ACOGE** la excepción de prescripción opuesta por la **JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS**.
- II. Que **SE ACOGE** la demanda interpuesta por don **PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ**, en representación de don **BORIS JAVIER**



**BARRENECHEA LLANQUIMÁN**, en contra de la **JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS**, sólo en cuanto se declara que existió una relación laboral entre las partes, desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022, y que el despido indirecto del actor, efectuado el 30 de junio de 2022 ha sido ajustado a derecho, incumpliendo gravemente su empleador las obligaciones que imponía el contrato de trabajo, y, en consecuencia, se condena a la referida demandada al pago de las siguientes prestaciones:

- a) \$1.319.706 por indemnización sustitutiva de aviso previo.
- b) \$9.237.942 por años de servicios (7).
- a) \$4.618.971 por recargo legal del 50% según lo indicado en el artículo 171 del Código del trabajo.
- c) \$205.433 por feriado legal y proporcional.
- d) Las cotizaciones en AFP Capital y AFC CHILE desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022, sobre la base de las remuneraciones indicadas en el motivo duodécimo, por el período de la relación laboral.

- III. Que se rechaza la demanda en todo lo demás.
- IV. Que las cantidades ordenadas pagar en forma precedente deberán serlo con los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo y 22 de la Ley N°17.322 desde la fecha en que quede firme la presente sentencia.
- V. Que cada parte pagará sus costas, ya que ninguna resultó totalmente vencida y tenían motivos plausibles para litigar.
- VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.



RIT : O-5611-2022

RUC : 22- 4-0426860-4

**Pronunciada por PIA ALEJANDRA DROGHETTI FUENTES, Juez  
Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**

En Santiago a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

